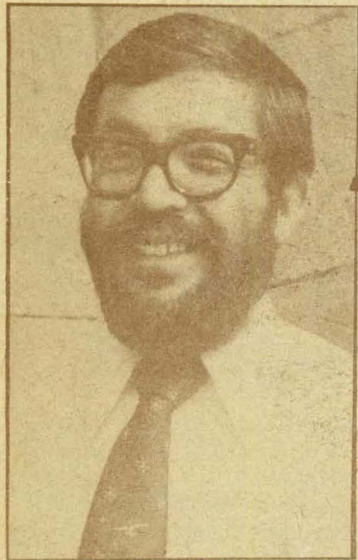


El terror de los Porros En Hidalgo

26-Junio/1985

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA



El gobierno hidalguense está frente a una excepcional oportunidad de dismantlar un organismo de presión, corrupción y terrorismo que pone miedo en el ánimo de muchas personas en varias ciudades del estado, incluida la capital. Como un subproducto de la todavía inexplicada caída del ex candidato a diputado federal José Antonio Zorrilla Pérez, parece en este momento posible privar a la federación estudiantil universitaria de Hidalgo de un poder que no sólo es contrario a la legalidad, sino que amenaza romper la estabilidad política y económica en la entidad.

Desde que entre 1965 y 1968, al mismo tiempo que era subdirector nacional del PRI, actuaba como asesor de la oficialía mayor del gobierno hidalguense, Zorrilla Pérez se vinculó con la federación estudiantil. Esta comenzaba a ser un organismo poderoso. La ley orgánica de la Universidad estatal le había conferido representación en el Consejo Universitario, y la administración de la casa de estudios le otorgó importantes medios materiales para su desarrollo. Pero fue a partir de 1969, durante el gobierno de Manuel Sánchez Vite, cuando la federación inició su edad de oro. Sus dirigentes alcanzaban, luego de dejar sus cargos, puestos gubernamentales o de elección popular, aunque ninguno de ellos se distinguiera por sus aptitudes, su emoción social o su afán de servicio. Al contrario, estaban la mayor parte de ellos como prensados por un mismo troquel: eran arribistas, arbitrarios, violentos, corruptos. Con ese equipaje, algunos fueron diputados, magistrados y jueces, funcionarios de la Universidad. Los gobiernos que sucedieron al de Sánchez Vite y al brevísimo de su amigo Otóniel Miranda, poco o nada pudieron hacer por disminuir el creciente poderío de una federación estudiantil que atentaba impunemente contra profesores, propiciaba latrocinios callejeros y se engallaba contra quien quisiera oponérsele, porque contaba siempre con patrocinios eficaces. Por ejemplo el de Zorrilla, que fue presidente del comité estatal de PRI durante los dos últimos años (1979-81) del gobierno de don Jorge Rojo Lugo y secretario general en la administración del arquitecto Guillermo Rossell, en 1981 y 1982, hasta que se le designó director federal de Seguridad. Tanta era la cercanía de Zorrilla con los dirigentes de la federación, que propició el tránsito de Gerardo Sosa Castelán del liderazgo universitario a la dirección del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno estatal. Desde esa posición, Sosa se convirtió en, al mismo tiempo, hombre de las confianzas de Zorrilla en el estado y dirigente real de la federación universitaria. Por ello no fue extraño que la prosperidad inundara las oficinas directivas de esa agrupación, pues no sólo contaban con los apoyos gubernamentales y de la Universidad, sino que sus líderes gastaban a manos llenas dinero cuya procedencia se ignoraba pero que ahora podemos suponer.

En los últimos meses, primero tal vez por la prepotencia generada en los porros que son jefes de la federación universitaria por los altos destinos políticos que le estaban anunciados a Zorrilla; y en las últimas semanas ante el temor, esperemos que fundado, de que la caída de su jefe los arrastre,

arreció la actividad antisocial de los líderes universitarios, de las bandas armadas que están directamente bajo sus órdenes, y de estudiantes desaprensivos que se sienten protegidos por aquéllos. De allí se deriva una creciente preocupación en grandes círculos de la ciudadanía, cuya vida y cuyos bienes así como su libertad de acción, han sido violentados por estos dirigentes juveniles espurios.

El comercio establecido se siente intimidado por la capacidad depredatoria de los jefes universitarios. Piénsese lo que se piense del giro comercial a que se dedican, lo cierto es que fue ilegítima y terrible la virtual destrucción de las discotecas **Keops** y **Borsalino** y del, digamos, lugar de recreo llamado **El Patio**, perpetrada por turbas de muchachos y sus líderes. En uno de aquellos lugares, un dirigente universitario asesinó a un parroquiano, y contra él debió librarse orden de aprehensión, sin que después pasara nada.

El 16 de mayo, una banda estudiantil saqueó, en la calle de Guerrero, la más comercial de Pachuca, una tienda de ropa de donde desaparecieron casi 2 millones de pesos en mercancía y en efectivo. A la semana siguiente, el 22, en Tulancingo, grupos semejantes asaltaron una vez más una pequeña dulcería propiedad del señor Ignacio García Gómez, que ha sido atracada por lo menos en diez ocasiones anteriores. Al día siguiente el 23 de mayo, se produjo un saqueo callejero, en el que resultaron víctimas principales camiones repartidores de refrescos y cerveza, pese a que en una clara compra de protección, los distribuidores cervancieros habían recibido hace tiempo, previos los donativos correspondientes, seguridades de la federación de que sus vehículos no serían atacados.

El 24 de mayo, en el bar de un hotel de Tulancingo, líderes de la federación agredieron sin más a los jóvenes Héctor y César Guzmán y Salvador del Villar, miembros de prominentes familias de la localidad. Les asestaron una golpiza de tales proporciones, que las víctimas debieron ser hospitalizadas durante varios días.

Al día siguiente, también en Tulancingo, una partida de malhechores, es decir, de dirigentes de la federación, asaltaron la zona de tolerancia y dispararon armas de fuego.

Los jefes de la agrupación estudiantil no sólo son atracadores vulgares e impunes. También participan en política. Algunas alcaldías se han convertido en posiciones suyas. En marzo, alebrestaron a los locatarios del mercado Benito Juárez para que se rehusaran a ser trasladados, no obstante que ya habían aceptado reubicarse en otro local. En vísperas de la Semana Santa, en lo que fue simultáneamente acto de populismo y caravana con sombrero ajeno, el presidente de la federación, Zenaido Meneses, ofreció al público pachuqueño el uso gratuito de las instalaciones deportivas del espléndido Centro de Extensión Universitaria, recientemente entregado por el gobierno estatal y sobre cuya utilización, obviamente, no le compete decidir. La semana pasada, el 12 de junio, Ezequiel Salinas, líder de la escuela de derecho, intervino sin que le incumbiera en la política del Centro Regional de Enseñanza Normal y sus secuaces golpearon a varios profesores y estudiantes, lo que provocó una indignada protesta del sindicato magisterial y el comienzo de una investigación por funcionarios gubernamentales.

Estos hechos son sólo algunos de los muchos que pudieran aducirse sobre la federación estudiantil de Hidalgo, que muestran la necesidad de actuar eficazmente para frenarla.